

Geopolítica y Narcotráfico en la América Andina

Pedro ARMAS DIÉGUEZ

1. INTRODUCCION

En el contexto en el cual Taylor (1985) encuadra los estudios geopolíticos en la teoría del sistema mundial de Wallerstein, que ha marcado una fructífera línea de investigación (Hopkings, Boulding, Bergesen, Webster, Thompson, Kennedy, Vidal...), se fijan tres escalas de análisis: global, nacional y regional. Adpotémoslas para conjugar dos variables, condiciones geopolíticas y economía delictiva, que ejemplifican tal interconexión sistémica.

La concepción historicista de Wallerstein (1979, 1984) parte de un estudio diacrónico del sistema capitalista, para llegar a la conclusión de que la uniformización de las pautas de consumo y los modos de vida, sustentada sobre el proceso inverso de jerarquización funcional, productiva, del territorio, conlleva una fuerte unión entre macro y microeconomía. Así, asistimos atónitos a la mercantilización de todo tipo de actividad y a la conversión del mundo en un gran mercado de abastos, donde unos cuantos comerciantes avispados consiguen, cada vez más rápidamente, acaparar beneficios en detrimento de otros. Y es que el tiempo, como afirma S. Hawking (1989), es también una mercancía escasa ; por ello, para obtener beneficios hay que comprimirlo. La intensificación y aceleración de los flujos de capitales, bienes e información han conducido a una *planetización* tal de los procesos que ya el comunicólogo McLuhan había planteado otra exitosa teoría, la de la *Aldea Global*, coincidente con la "world economy" y el "modelo tierra". Ambas, engarzadas, contienen un marcado componente espacial, que no puede pasar inadvertido a los ojos de los geógrafos.

En dicha internacionalización conviene diferenciar la economía formal, cuyos flujos corren por circuitos legalmente establecidos, y la informal, que a veces va paralela a éstos (economía sumergida). A la última, que aumenta exponencialmente, corresponden las actividades vinculadas al narcotráfico; término extensivo, pues alguna de los principales mercancías no son narcóticas, caso de la cocaína. El tráfico de drogas quizás constituya el ejemplo más terrible de la mencionada mundialización económica, pero con unos impactos regionales específicos y unas connotaciones geopolíticas especiales en la América Andina.

Numerosos analistas hablan de un “nuevo orden económico internacional” (Tamames, Schneider, Laudes, Sorman, Tofler) que comienza a regir la vida de la Aldea, en el cual pueden carecer de sentido interpretaciones teóricas a partir de binomios estructuralistas, ya clásicos, del tipo norte-sur o centro-periferia (Prebisch, Sunkel, Furtado, Sid Ahmed..) y menos aún las tesis de la división del trabajo de A. Smith o de los costes comparados de D. Ricardo. Tal rechazo tajante parece discutible. En este breve artículo (avance de una investigación más detallada) se demuestra que el desarrollo de la economía criminal en las tierras andinas responde tanto a una verdadera revolución de los desheredados de la Aldea (Chesnais, Schneider) como a una especialización regional en la producción de bienes que muestran unas netas ventajas relativas respecto a otros, al margen de su coste absoluto y de la ética de su obtención; y es que los “costes comparativos” formulados por Ricardo a principios de XIX siguen vigentes en un mundo más mercantilizado y menos escrupuloso.

2. DEL ALTO HUALLAGA A BEVERLY HILLS

Los últimos dirigentes de la mayor potencia mundial se consideran adalides de dos cruzadas permanentes, además de otras esporádicas (ej. guerra del Golfo). Una de ellas mercantil, contra la CEE y, sobre todo, Japón, en la cual sólo pueden luchar con sus lanzas sagradas del librecambio o golpeando la mesa en sucesivos ataques de nipofofia. La segunda es la cruzada contra las drogas, que les permite justificar incluso la invasión militar de otros países, a veces solapada y hasta reclamada (acciones de la DEA en Colombia), a veces masiva y sin reparo (invasión de Panamá, donde cientos de muertos civiles fueron el precio de la captura del general Noriega).

Tal celo nos da una idea de la importancia e imbricaciones internacionales del tráfico de estupefacientes. No obstante, la droga es un bien de consumo antiquísimo, un bien de comercio desde mediados del siglo XIX y el mayor negocio del mundo desde hace unos años. En otras palabras, quizás seamos los únicos que no las hemos sabido utilizar (G^a Hidalgo, 1990). Mientras la droga estuvo vinculada a la religión o a la medicina no constituyó un problema, se hallaba integrada en la sociedad. Los sumerios y asirios consumían opio, los hindúes cáñamo (se lo recomendaba el Veda), los incas hojas de coca, los mayas el alucinógeno peyote, Sherlock Holmes cocaína (también recomendada por Freud o León XIII), Noé alcohol, etc... A lo largo del XIX los británicos fomentaron en China el primer gran mercado de drogas, en torno al *opio* que suministraban las plantaciones de adormidera de la East India Company. Comenzaba el negocio: contrabando, intrusión de otras potencias, nuevos productos (alcaloides puros como la heroína o la morfina), uso de sustancias psicotrópicas en medicinas o refrescos (Coca-Cola), etc. Durante las primeras décadas del XX la confusión ética y los resultados de ciertas normas prohibitivas (“Ley Seca” en USA) condujeron a la legalización definitiva de drogas como el

alcohol, el tabaco o el café y a la permisividad de otras como la cocaína o la marihuana, consumidas por esnobismo entre grupos de los extremos de la pirámide social. En los años sesenta y setenta la sociedad norteamericana se vio convulsionada por el *movimiento hippy* (a menudo mal interpretado) y por el “síndrome de Vietnam” (donde muchos jóvenes buscaron alivio en las drogas); ambos generaron grupos de personas insatisfechas, deseosas de nuevas experiencias, que sumadas a otras integradas en el sistema, pero frustradas individualmente, constituían un mercado fácil para los suministradores de LSD, cannabis o heroína. Los jóvenes urbanos europeos también copiaron estas costumbres. Lo ocurrido anteaayer ya es historia en el mundo de narcotráfico.

Hoy la droga mueve más de medio billón de dólares al año; el 60% de ellos procedentes de los EEUU. Ningún producto genera per se tantos beneficios. Hay oferta porque hay demanda. Pero, no es una oferta de Perú, Colombia o Bolivia a los EEUU o a Europa. No hablamos de comercio legal. Es una oferta de unas cuantas mafias internacionales a 50 millones de drogadictos, la mitad de ellos en USA, desde las cloacas del Bronx a las mansiones de Beverly Hills. Y es una oferta que se incrementa al margen de vaivenes de precios o de políticas más o menos duras y que depende muy poco de los lugares de producción. Sólo el 10-15% de los beneficios del comercio de estupefacientes revierte en los países productores. Por tanto, las *soluciones regionales* y locales sobre la oferta, represivas, resultan insuficientes y discriminatorias. Si donde realmente circula el capital es en los países receptores, habrá que incidir sobre la prevención del consumo, la limitación del tráfico y, especialmente, el blanqueo de dinero proveniente de la droga; sin embargo, es más fácil actuar contra los cultivadores de hoja de coca del alto Huallaga peruano o los campesinos de Las Yungas y El Chapare bolivianos que contra el Banco de Crédito y Comercio Internacional de Luxemburgo o sobre la Shakarchi Trading de Zurich, amparados por el efectivo secreto bancario. Un dato para la reflexión: en 1991 fueron capturados menos de 500 millones de dólares en fase de blanqueo. Otro: sólo es incautado en 10-15% de la droga puesta en el mercado. Resulta más sencillo (y tal vez más “barato” en términos políticos) quemar un campo de mil hectáreas de coca colombiana que detener a un gánster neoyorquino o madrileño.

Si se quiere cortar dicho juego de oferta-demanda, debe intervenir más sobre esta última de lo que se ha venido haciendo. Los países andinos han de enfrentarse a graves problemas derivados del narcotráfico (corrupción, deterioro sociopolítico, violencia, etc.). Pero, en cuanto al aspecto puramente “mercantil” de este negocio, el problema lo tienen los países europeos y, más que ninguno, los EEUU. Hacia Europa se desvía en torno al 30-35% del tráfico de sustancias psicotrópicas. Las preferencias del mercado europeo son algo diferentes a las del estadounidense, aunque con tendencia a igualarse. Europa es más heroinómana (1,5-2 millones de adictos sólo en la CEE), los EEUU más cocainómanos; marihuana y hachís se hallan difundidos en ambos; ciertas drogas más modernas y peligrosas, como la cocaína semiprocesada (crack) o la

metanfetamina cristalizada (ice), por el momento son consumidas mayoritariamente en el mercado norteamericano. No obstante, la cocaína tiene cada vez más peso relativo en uno y otro. Mientras las restantes drogas provienen de focos diversos: heroína de Birmania, Tailandia o Turquía, marihuana del Caribe y los propios EEUU, hachís de Africa, drogas de laboratorio made in USA, etc., más del 80% de la cocaína procede de los países andinos (producida, especialmente, en las regiones selváticas de Perú y Bolivia y exportada desde Colombia, sobre todo hacia los Estados Unidos). De ahí que el problema de la droga sea ahora mismo un problema de la “*economía de la cocaína*” y, en el fondo, un problema estadounidense y europeo (con España como conexión puente), aunque se busquen cabezas de turco en las regiones productoras. No olvidemos que la Aldea Global funciona hoy como un sistema; cualquier actuación sobre alguno de sus elementos tiene repercusiones en el conjunto.

El narcotráfico, actividad que conlleva altas dosis de *dinero y riesgo*, se ha convertido en el gran negocio de la última década porque se ha incrementado el número de personas necesitadas del primero y dispuestas a correr el segundo. No sólo campesinos miserables, con poco que perder, inconscientes respecto al destino final de su producción o bien indiferentes en cuanto a que deben ser otros los que decidan sobre la conveniencia o no del consumo; también, y sobre todo, mafias organizadas (cárteles de Medellín, Cali, Bogotá), funcionarios de las dictaduras de los setenta que “han de mantener su nivel de vida”, guerrilleros acostumbrados a manejar dinero (pertenecientes a movimientos como Sendero Luminoso o Tupac Amaru), grupos paramilitares, políticos, jueces y militares corruptos (hasta en Cuba), banqueros que facilitan el blanqueo de narcodólares (en el Caribe, Argentina, Chile, USA, España, Suiza), traficantes de segundo nivel (en las Rías gallegas, en la costa andaluza), “camellos” callejeros, etc., cada uno de ellos con su grado de responsabilidad ética en dicha cadena de *economía criminal*. La mayoría son delincuentes a los que poco importa la razón ética de este negocio. Sin embargo, algunos, los que ocupan cargos públicos, amparados en el sistema democrático, pretenden beneficiarse del narcotráfico, o incluso de los fondos externos destinados a la lucha contra el mismo, y a la par presentan a sus países como víctimas de complots internacionales. La democracia no puede evitar tal hipocresía. Primero porque cuentan con instituciones débiles y segundo, porque, cuando no es así, la democracia tampoco es perfecta. Si en los países más avanzados políticamente los gobernantes acaban actuando como cualquier comerciante, con las ventajas de la información, la seguridad y el jugar con el dinero de los demás - y no se trata de una exageración radical por mi parte, sino de la esencia del Public Choice del Nobel de 1986 J. Buchanan-, con más facilidad se prestan a la corrupción en sociedades donde la “picada” o soborno es práctica habitual. Los culpables son hombres concretos, no países. Y más culpables los que tienen más poder. Por eso mismo, no se puede pedir a las autoridades honradas de países del Cuarto Mundo que reorganicen una economía criminal controlada por organizaciones transnacionales que cada año manejan bienes y capitales

por un valor que más que duplica el obtenido por las transacciones petrolíferas.

Las redes de narcotráfico cuentan con una estructura piramidal. Cuanto más arriba de ésta menor es el número de personas que intervienen y mayores las ganancias. Madelmann desglosaba así el reparto de los beneficios de un Kg. de cocaína en 1986: 4 dólares al cultivador (son cada vez más los campesinos que han aprendido el proceso químico mediante el cual, tratando las hojas de coca maceradas con cal, gasolina y amoníaco, se elabora la pasta de cocaína), 800 dólares al procesador, 7.500 al transportista, 6.000 al refinador del "polvo de angel", 9.000 al exportador y 30.000 dólares a la red distribuidora en destino. Los *exportadores*, sólo unos 300, constituyen un cuello de botella (G^a Hidalgo, 1990). En definitiva, los 500 pesos que recibe un cultivador actualmente por un gramo de cocaína en la selva colombiana pueden llegar a ser multiplicados por 200 en un barrio de Miami. Quizás sean varios los millones de personas que, directa o indirectamente, sobreviven gracias a la producción de drogas en la América Andina; más numerosos, unos 25 millones, son los norteamericanos que malviven gracias a su consumo. Para aquéllos se trata de una cuestión de subsistencia, para éstos de autodestrucción. La situación de los primeros se halla muy determinada por las actuales condiciones geopolíticas, internacionales y regionales.

3. ANALISIS REGIONAL DE UN CASO SIGNIFICATIVO: BOLIVIA

Si observamos los indicadores económicos más recientes, Bolivia parece haber iniciado una fase de recuperación, tras la profunda crisis a que la habían conducido una serie de medidas neoliberales aplicadas desde 1985. Se ha frenado la inflación (de una tasa media anual del 482% entre 1980 y 1988 se ha pasado a menos del 20% en la actualidad), se ha reducido la deuda externa (de 5.000 a 3.500 millones de dólares) y se ha logrado una estabilidad alabada por el FMI. El país continúa exportando minerales, sobre todo estaño (300-400 millones de dólares), gas natural (200-250 millones), madera, soja y otras materias primas. Pero, tal bonanza monetaria se debe a la inyección de 600-700 millones de dólares que asimila la economía legal de Bolivia como parte del botín de 5.500-6.000 millones que pasan por manos de los traficantes de coca cultivada en su regiones selváticas. Coca que en los últimos años ya se exporta en un 75-80% como cocaína, puesto que Bolivia comienza a "beneficiarse" del denominado "*efecto globo*" o de reasentamiento de los laboratorios colombianos dedicados a la purificación y refinado del producto. De ahí la preocupación del gobierno de los EEUU y sus presiones sobre el boliviano para que intervenga en las tierras amazónicas; que se ha traducido en un acuerdo de cooperación que supone la militarización de la lucha contra el narcotráfico. Los EEUU han enviado unos cientos de "boinas rojas" y han aportado unos 35 millones de dólares. Los gobernantes bolivianos han ordenado a su ejército que efectúe algunas *incursiones en la selva*, cuyos resultados han sido míni-

mos, aunque se hayan exagerado propagandísticamente. La implicación de altos cargos con el narcotráfico, los primeros conatos de reorganización de la guerrilla (que se ve con fundamento social como consecuencia de la intervención del ejército, ahora mismo ya replanteada, con el apoyo “imperialista” norteamericano) y, en el fondo, la escasa voluntad por cortar ese flujo de millones, que tanto la economía clandestina como la formal absorben sin reparos, conllevan el fracaso de estas acciones represivas.

Por otra parte, los logros monetaristas y la euforia que despiertan proyectos como “Boliviamar” (acuerdo con Perú por el que el país contará con el usufructo de una zona franca en torno al puerto Ilo) no deben ocultar los *indicadores de subdesarrollo boliviano*: una renta per cápita de 600 dólares, un 22% de analfabetismo, una mortalidad infantil superior al 100 por mil, una esperanza media de vida inferior a 55 años..., todo con las consabidas disparidades sexuales y étnicas y en un país con tasas anuales de crecimiento demográfico de 2,8% e índices de fecundidad de 6 hijos por mujer en edad de procrear, con lo cual los 7,3 millones de habitantes actuales aumentarán a casi 10 millones en el año 2000. Aunque la balanza comercial se equilibra y la economía en su conjunto haya invertido la tendencia negativa de la década anterior (ahora crece a un ritmo de 2,5% anual), los servicios y equipamientos resultan insuficientes (menos de un médico por cada mil habitantes, menos de 15% de población con agua potable en medios rurales, menos de 40 líneas telefónicas por cada mil habitantes, etc.).

Si a lo anterior añadimos una tasa de desempleo del 25%, una sociedad poco integrada, en la cual el marginado componente indígena (quechuas, aymarás) representa un 45%, y una economía formal exigua y dependiente, casi exclusivamente, de un Estado muy débil, se comprende que en la caracterización estereotipada de la base económica boliviana se haya pasado de la “*economía del estaño*” a la “*economía de la coca*”. La economía sumergida ya había superado ampliamente a la economía formal en cuanto a contingente laboral, gracias sobre todo al denominado sector informal urbano. En los últimos años la intrusión masiva de los narcodólares en aquella ha repercutido en que también la supere en cuanto a capitales movilizados. Las coyunturas internacionales (demanda de cocaína) y nacional (crisis de estaño, paro) han acelerado el proceso.

No obstante, las causas del auge de la economía de la cocaína no sólo son económicas, sino también *geopolíticas* y puramente *geográficas*. Bolivia se extiende sobre tres regiones fisiográficamente muy diferentes y funcionalmente muy desarticuladas. El altiplano andino, tierra de la puna, los salares y los lagos Titicaca y Poopó, protegido y aislado por cadenas montañosas de más de 6.000 m., ha constituido el corazón humano y económico del país, con sus capitales (La Paz y Sucre) y sus ciudades minero-industriales (Oruro, Potosí, Cochabamba). Este corazón tradicionalmente ha gravitado hacia occidente, hacia el añorado Pacífico; ha dado la espalda a la región de la cuenca del Plata y sobre todo a la región amazónica (su interés se detenía en los yungas de Cochabamba). El descubrimiento de petróleo en la región oriental ha potenciado como capital fronteriza a Santa Cruz de la Sierra. Bastantes bolivianos emi-

graron a las laderas bajas del este, ocupándose en actividades extractivas e industriales. Muchos más, campesinos del altiplano, colonizaron las insalubres regiones de Los Yungas y El Chapare, donde dedicaban un par de hectáreas de sus parcelas al cultivo de la hoja de coca (15.000 tm. anuales), para atender una demanda tradicional de consumo de coca masticada en celebraciones rituales o como hábito cotidiano (Carter y Mamani, 1986). Así, una familia tipo de las 15.000 instaladas en El Chapare, por ejemplo, obtenía en los años finales de los setenta beneficios de unos 15.000-20.000 dólares, inusuales en el resto del país (Blanes, 1983).

Durante los ochenta, la “década perdida” de América Latina (Bouzas, 1988; Reynolds, 1989), muchos más campesinos asumieron los riesgos del cultivo de la coca, por sus ventajas comparativas respecto a otros productos y porque se había agravado su ya miserable situación. Además, en las fincas de las regiones cocaleras los propietarios iban dedicando cada vez más hectáreas a ésta. La actividad se intensificó en las tradicionales regiones productoras; la difusión de noticias sobre los pingües beneficios que generaba atrajo a miles de trabajadores, en su mayoría campesinos, pero también “urbanícolas” (hoy en El Chapare casi medio millón de personas viven del cultivo de la coca). Fue tal la expansión del cultivo que la coca desbordó las laderas y valles profundos de los Andes de La Paz y Cochabamba y se extendió por las llanuras amazónicas; allí el bosque ombrófilo servía de perfecto camuflaje a miles de hectáreas de labor y a cientos de minúsculos aeródromos desde donde la materia prima era enviada a Colombia para su tratamiento. La economía formal se desplazaba hacia oriente, la economía clandestina también. Por otra parte, puesto que durante estos años el gobierno boliviano comenzó a aplicar ciertas medidas represivas contra el narcotráfico interno, numerosos campesinos optaron por aprender los procesos químicos para transformar la hoja de coca en pasta de cocaína. Con riesgos parecidos, sus ganancias se incrementaron notoriamente. La especialización alcanzó a la coca boliviana: productores de sulfato, pisadores, procesadores, rescatadores, refinadores, etc.; un inmensa plantilla de campesinos analfabetos y parados urbanos se reciclaron para evitar las fugas de valor añadido. La coca ya salía del país como cocaína. Eso sí, de su exportación habrían de encargarse mafias muy cerradas, con auténticos ejércitos privados y muy bien “relacionadas” política y judicialmente. La implicación de cargos públicos en el negocio y la atomización del proceso productivo motivaron el desvío de las inversiones bolivianas hacia la economía ilegal, con el consiguiente caos de la economía formal (tasas anuales decrecientes en la industria (-10%), inflaciones del 10.000%, etc.), al menos durante la década pasada, mientras la economía legal no fue capaz de absorber parte de los beneficios del narcotráfico.

Como es obvio, resulta difícil evaluar estadísticamente el impacto de la coca en la economía boliviana. Partamos de investigaciones que han llegado a estimarlo para el primer quinquenio de los ochenta (Doria y Escobar, 1986; Blanes, 1989). Si en 1980 el PIB de la cocaína representaba el 10% del del la *economía formal*, en 1985 suponía ya el 80%. En la actualidad, mediante indi-

cadores indirectos, podemos deducir que probablemente alcance el 150%. Deben tenerse en cuenta las proporciones variables en la relación coca/cocaína (300-350/1), según el tipo de hoja y la pureza de la pasta, según sea procesada en laboratorios o en “cocinas” caseras. Asimismo, hay que contar con que un 10-20% de la producción continúa destinándose a la demanda tradicional interna y con que el crecimiento exponencial apuntado para los últimos años tiene mucho que ver con el “efecto globo” y con que Bolivia haya dado recientemente el salto del “sector primario” (cultivo) al “sector secundario” (procesado) dentro de la economía cocalera. Sin embargo, el impacto de la coca en la economía boliviana no debe medirse sólo a través del valor de su producción (400 millones de dólares en 1980, 2.500 en 1985, más de 5.500 actualmente), pues ha trastocado toda la estructura financiera, productiva y mercantil del país. El Estado y la economía legal se vieron impotentes ante los espectaculares rubros de capitales flotantes derivados de la cocaína. La impotencia les condujo a la complicidad. La dinámica de la vida económica boliviana pasó a estar marcada por la cocaína y su cortejo de *actividades paralelas*: mercado negro de narcodólares, fuga de divisas, especulación inmobiliaria y contrabando de artículos suntuarios para satisfacer la demanda de los “nuevos ricos”. Todo ello en un país donde la *economía informal* ya había adquirido carta de naturaleza en el campo (cocaleros), en las minas (rescatadores de mineral) y, sobre todo, en las ciudades (vendedores ambulantes, contrabandistas). En todos los barrios urbanos, y no sólo marginales de La Paz, Santa Cruz o Cochabamba, un ejército de ex campesinos actúan como “*trabajadores autónomos*”, a caballo entre la economía sumergida y la economía clandestina, delictiva. El Estado ocupa a un 25% de la población activa urbana y la economía formal privada a sólo un 15%; el resto lo constituyen trabajadoras del “servicio doméstico” y multitud de vendedores de toda suerte de productos, la mayoría subcontratados por los comerciantes más poderosos, quienes además controlan los principales gremios (Blanes, 1989). Se trata de un terciario mercantil marginal desde la óptica del mundo desarrollado, pero básico para Bolivia. Su versatilidad la ha permitido adaptarse, y desarrollarse, ante las nuevas pautas de consumo y financiación. En efecto, la presión de capital flotante procedente del narcotráfico ha generado nuevas necesidades y nuevas expectativas financieras. Paradójicamente la ostentación se ha adueñado de una sociedad pobre. Para atender esa demanda de ciertos bienes lujosos o simplemente superfluos, ha prosperado un activo *contrabando* con los países vecinos. Hacia la economía informal han dirigido sus exiguos capitales numerosos inversionistas pequeños. Todo ello con la aquiescencia o incompetencia del Estado, que, presionado por la crisis económica y por los grupos sociales dominantes, favoreció una política neoliberal muy permisiva. Economía sumergida y economía criminal se han fusionado, progresando mutuamente.

Resulta casi imposible calcular la cantidad de dinero que la droga introduce en los circuitos monetarios del país (los 600-700 millones de dólares anuales son una estimación), entre otros motivos por la tendencia de los principales

capos exportadores y altos cargos corruptos a sacarlo de Bolivia con urgencia. No obstante, la ganancia rápida de la coca conlleva un gasto también inmediato, por parte de los implicados en niveles inferiores del negocio, orientado a la adquisición de bienes inmuebles y bienes típicos del “consumo imitativo” (automóviles, sofisticados electrodomésticos, etc.), todos ellos importados. A la vez que este consumismo anacrónico ha transformado los modos de vida de ciertos bolivianos, la coca ha permeabilizado las capas sociales. Por ejemplo, pequeños comerciantes, técnicos o maestros se sienten tentados a convertirse en rescatadores o traficantes locales de coca, los más atrevidos, o bien de artículos de contrabando. Consiguen así el *ascenso social* que les niega la economía formal, aunque dirigen hacia ella parte de los beneficios obtenidos de manera más o menos ilegal; los bancos no ponen reparos a su procedencia. En un país con abismales diferencias sociales, la necesidad de vivir, y consumir, deprisa se impone a supuestas consideraciones morales. Es difícil que la ética impida que un joven desempleado, en medio rural o urbano, dedique algunos días a trabajar como “pisoteador” de hojas de coca, si no se le dan otras alternativas mínimamente atractivas y si a su alrededor ve que sólo prosperan los ocupados en la economía clandestina. No es de extrañar, pues, que mientras se hundan la industria y descenden las importaciones registradas, aumente el dinero en circulación y proliferen los productos de contrabando importados.

Si la actividad informal se ha adueñado de la economía, si dentro de ella el narcotráfico constituye el auténtico motor y si la droga se paga en dólares, ha sido imparable, y hasta impulsada políticamente, la *dolarización* de la economía boliviana. El gobierno ha legitimado el mercado negro de divisas, la especulación y la usura. Se ha ahorrado pesos y ha contenido la inflación en niveles envidiados por sus vecinos latinoamericanos. Los bancos, que apenas han apoyado a los sectores productivos, admiten sin pudor los narcodólares y ofrecen altos intereses cuando éstos son depositados a plazo fijo.

Los *artículos de contrabando* (norteamericanos, japoneses, brasileiros, argentinos, chilenos), cuyo consumo se asocia al éxito social, son vendidos en puestos ambulantes, galerías especializadas, “supermercaditos” de barrios residenciales e incluso en barrios enteros dedicados a tal función mercantil, caso del “Miamiquito” de La Paz (Doria, 1986). En suma, toda una red de unidades minoristas que constituyen la base de una estructura piramidal, similar a la del narcotráfico, con el cual se halla imbricada.

Por tanto, tres son las claves para el análisis de la actual situación boliviana: economía delictiva o criminal, economía sumergida y complicidad estatal; las tres conectadas y difícilmente separables. Fijémonos ahora en la última. Justificar la informalización de la vida económica de Bolivia escudándose en la tradicional inestabilidad política del país resulta simplista. La debilidad institucional no explica per se la corrupción. Esta ha existido tanto durante la dictadura de Hugo Bánzer como en la actual “*narcocracia*”, porque Bolivia siempre ha padecido gobiernos clientelistas, al margen de sus ideologías. En dicho sentido, la geopolítica regional ha sido determinante. En los años setenta

la supuesta modernización del aparato de Estado coincidió con la emergencia de la región oriental, en torno a Cochabamba y, especialmente, Santa Cruz. Allí el Estado sólo ha sido intervencionista a la hora de encauzar ciertas actividades extractivas, sin embargo ha actuado de modo permisivo en materia mercantil, agrobusiness y, sobre todo, contrabando y narcotráfico, a cambio del control político de las alejadas tierras del Mamoré y los Llanos. Lo que en principio constituyó una colonización agropecuaria se transformó luego en una colonización cocalera (Delpirou y Labrousse, 1986).

En la década de los ochenta el Estado no sólo fue permisivo con el tráfico de estupefacientes, sino que participó de él. Fue intervencionista, pero no prohibicionista. El “narcogolpe” de García Meza, la vinculación de algunos ministros y altos mandos de la Fuerzas Armadas con el narcotráfico, así como el interés de ciertos grupos paramilitares por el negocio de la droga y el contrabando, marcaron todo un *modus vivendi* alrededor de la cocaína. De la informalización de la economía se pasó a la *informalización del Estado* (Blanes, 1989).

En la actualidad se ha dado todavía otro salto cualitativo, el de la *incorporación de los beneficios de la coca a la economía legal*; tutelado por los grupos de poder en el aparato estatal, quienes dirigen la economía según propia conveniencia. Como, por otra parte, la ola de privatizaciones y el recorte de las prestaciones sociales, propios de la ideología liberal dominante, coinciden con las directrices del FMI, las magnitudes macroeconómicas van aparentemente por buen camino. Es tal la importancia de la cocaína para Bolivia que su impacto no puede ser explicado desde una óptica exclusivamente economicista, pues conlleva variables tan dispares y contradictorias como el hundimiento de la economía productiva, el incremento de capitales circulantes, la generación de empleo, la transformación del mercado de consumo, las nuevas estrategias familiares para la supervivencia, la corrupción de cargos públicos, las triquiñuelas bancarias para el blanqueo de narcodólares, la violencia política, la delincuencia común, etc. El efecto es pues el mismo que el de la droga, estimulante y depresivo. Y tal vez como ella, otorgue al país una libertad, una independencia, fugaz y falsa, ya que, de hecho, Bolivia ha pasado de la dependencia del estaño a la dependencia de la cocaína; el primero controlado por las empresas consumidoras de los países desarrollados; la segunda por las redes de narcotraficantes de los mismos países.

4. OTROS CASOS REGIONALES Y CONCLUSIONES

La extensión de este artículo no nos permite profundizar en el análisis de otras complejas situaciones regionales dentro de la propia América Andina. Por ejemplo, el *Perú* es víctima de una guerra soterrada de los movimientos revolucionarios Sendero Luminoso (maoísta, mesiánico y pseudoindigenista), Tupac Amaru (guevarista) y las recientes Fuerzas Populares de Liberación

contra el Estado, en la cual la coca juega un papel fundamental. De hecho, el control de las regiones cocaleras resulta vital para la guerrilla. Aunque el 60% del territorio peruano haya sido declarado en estado de emergencia, los narcotraficantes gozan de la estabilidad necesaria para su negocio en ciertas regiones a cambio del pago de un "impuesto revolucionario". Así, Sendero Luminoso se ha adueñado del alto Huallaga, desde donde sale la mitad de la coca consumida en el mundo. En los pueblos principales de este valle amazónico (Pachiza, Juanjuí) ni siquiera ejercen autoridades públicas. Unos 200.000 productores de coca en otras tantas hectáreas de fértil tierra desarrollan su labor entre el miedo a las acciones esporádicas de la DEA, las represiones propagandísticas de la Policía y el Ejército de su país, las matanzas indiscriminadas de escuadrones de la muerte antiguerrilleros y la "protección violenta" de Sendero Luminoso, que no duda en liquidar a los que no contratan sus "servicios" y a los "protegidos díscolos". No es extraño que de las 3.200 víctimas debidas a este conflicto en 1991 el 40% fuesen civiles y sólo el 1% narcotraficantes.

En el "territorio liberado" del valle del Huallaga se estima que han sido construidas más de 70 pistas clandestinas de aterrizaje, fácilmente camufladas en la selva, de las cuales despegan, preferentemente hacia Colombia, media docena o más de avionetas cada día, muchas de ellas con media tonelada de pasta de coca o bien "polvo de ángel", pues también en Perú comienzan a proliferar los laboratorios, por el "efecto globo". Mientras los agentes de la DEA destruyen algunos campos, pistas y laboratorios, muchos de los soldados, de uno de los ejércitos peor pagados de América Latina, se pasan al narcotráfico. En un país con 12 millones de personas en absoluta miseria, donde el ingreso medio per cápita ha disminuido en un 16% entre 1985 y 1991, azotado por una terrible epidemia de cólera (más de 250.000 afectados), con una guerra "civil" que corroe los cimientos de la sociedad, una débil capacidad institucional (en la cual hasta tienen lugar autogolpes de Estado) y un millón de individuos viviendo, directa o indirectamente, de la coca, no parece que la solución policial sea la más efectiva; como tampoco parece que la exigua ayuda estadounidense (35 millones de dólares) sirva para otra cosa que para advertir a los militares peruanos de la conveniencia de comprar armamento a los USA en vez de a los rusos, como venían haciendo. Entretanto la economía peruana recicla cada año unos 2.000 millones de narcodólares.

En *Ecuador* desde el siglo XVI prácticamente no se cultiva la hoja de coca. Sin embargo, en los últimos años, y también a causa de las dificultades con que se encuentran los fabricantes colombianos, están proliferando los laboratorios clandestinos en la región de Santo Domingo de los Colorados. De ahí el incremento desmedido de la importación de componentes químicos imprescindibles para la elaboración de cocaína (acetona, éter, etc.). Cuando se comenta que el aumento de las exportaciones bananeras y petrolíferas ha conseguido limar algo una deuda externa de 11.000 millones de dólares que pesa como una losa, se suelen olvidar los 500 millones que dejan en el país la fabricación de droga y, sobre todo, el blanqueo de dinero del narcotráfico.

Aquellas involucran sólo a unos cuantos ecuatorianos (ricos hacendados y ejecutivos, vinculados a empresas extranjeras), éstos a numerosos minifundistas serranos (que en vano han confiado en la reforma agraria) y desheredados de las ciudades.

En *Colombia* operan los traficantes más famosos; aunque por sus manos pasen menos narcodólares que por las de ciertos “capos” de las mafias norteamericanas. No obstante, la imagen del país ha sido marcada por la droga, como la de ningún otro. En ello ha incidido el hecho de que dos tercios de la cocaína consumida en el mercado estadounidense procedan de Colombia. En su día fue el *cártel de Medellín* el principal suministrador; el cual llegó a obtener unas ganancias supuestas de 2.000-4.000 millones de dólares anuales. La política de “no extradición” dio sus frutos (por ejemplo, la entrega de Pablo Escobar y de los hermanos Ochoa). El *cártel de Medellín* sufrió una serie de duros golpes (detenciones, aprehensiones de alijos, etc.). Su lugar pasó a ocuparlo el menos ostentoso *cártel de Cali*, que, además de controlar actualmente el 60% del mercado de la cocaína norteamericana, ha diversificado inversiones hacia la industria y la comercialización de alimentos, fármacos, etc., en vez de construirse magníficas mansiones con bañeras de oro, como sus competidores de Medellín. En un tercer nivel, el *cártel de Bogotá* ejemplifica el grado de intrusión de los narcos en el aparato del Estado. Estos tres grandes cárteles controlan plantaciones, laboratorios, redes de distribución mayorista y minorista, instituciones judiciales y políticas, etc., dentro y fuera de Colombia. Aparte de la fuga de capitales derivados del narcotráfico, más de 3.000 millones de dólares son reabsorbidos por las economías informal y formal colombianas (por ejemplo, a través de la “ventanilla siniestra” del Banco de la República), y coadyuvan a que el país pueda pagar, con relativa comodidad, los plazos de su importante deuda externa (18.000 millones de dólares), frenar la inflación y presentar crecimientos superiores al 3% anual en un momento crítico para la América Andina.

En el plano geopolítico, durante las décadas de enfrentamiento entre el Estado colombiano y las diversas facciones guerrilleras ha sido clave el control de las regiones cocaleras. Integrado el M-19 en la vida política, todavía persisten en la lucha las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), entre otros grupos. Mientras el Gobierno ha optado, con vaivenes, por la política de “aniquilación” de la guerrilla (según algunos, como pretexto para detraer más del presupuesto nacional para apoyo del ejército), la guerrilla ha optado por el narcotráfico, la extorsión y el sabotaje (por ejemplo, volando oleoductos) a compañías públicas y extranjeras, que le cuestan al Estado unos mil millones de dólares anuales. Sin embargo, en algunas regiones selváticas colombianas narcos y guerrilleros compiten por el tráfico de coca, a diferencia de lo que veíamos en el Huallaga.

La política represiva e intervencionista patrocinada por la Administración Reagan en su “*guerra contra las drogas*”, que supuso en su día sanciones a Colombia por declarar inconstitucional el Tratado de Extradición, resultó ineficaz y exarcebó el nacionalismo antiyankee. Las decisiones unilaterales

impuestas y la financiación de proyectos puntuales (como la instalación de una red de radares para detectar avionetas; solventada por el cártel de Cali enviando la droga a USA en barcos a través del canal de Panamá, donde nadie controla la mercancía transportada) no dejan de ser parches a un problema que exige colaboración multilateral.

Las acciones directas de la DEA o del propio ejército norteamericano (por ejemplo en la “operación alto horno”, Bolivia 1986) y la implicación de las fuerzas armadas locales, con la ayuda técnica de los EEUU (servicios de inteligencia, armamento, helicópteros, radares, herbicidas, etc.), han constituido rotundos fracasos. Aunque pueda parecer una observación fría, el narcotráfico, como problema esencialmente económico, exige soluciones económicas. Y, como problema que afecta a toda la Aldea Global (los cárteles son auténticas multinacionales), exige que dichas soluciones sean financiadas según el grado de corresponsabilidad en la misma. En tal sentido, los EEUU quizás se hayan equivocado en el planteamiento de su lucha antidrogas, pero han sido los únicos del mundo desarrollado que han tomado cartas en el asunto (unos 10.000 millones de dólares anuales); cierto que son los más afectados y, de hecho, en sus cárceles uno de cada tres presos lo es por delitos ligados al tráfico de estupefacientes (Bagley, 1989).

Las alternativas económicas no deben limitarse a las propuestas retóricas. Por ejemplo, controlar la demanda legalizando el consumo, para abordar el problema como una cuestión de salud pública (educación de los jóvenes, reinserción de los adictos, fiscalización de la mercancía, etc.), no constituye una alternativa realista, sobre todo para los países de la América Andina, donde se trata de un problema sanitario de mucha menor incidencia que otros (falta de higiene, difusión de epidemias, etc.). Las *alternativas económicas* han de abordarse a dos escalas, aunque dependientes ambas del apoyo internacional. Por un lado, la mayor flexibilización en el tratamiento de las deudas exteriores, que asfixian a los países andinos, a la vez que un mayor control interno de la operatividad de sus políticas económicas (el “Plan Brady” no iba descaminado en esta línea). Por otro, la puesta en marcha de programas de desarrollo regional selectivo sobre la base de cultivos sustitutorios (flores, café, frutas tropicales, plantas medicinales, etc.), a los que debiera catalogarse como productos de comercio preferencial. Y es que, asumiendo una de las premisas antropológicas de A. Lewis, desarrollarse es contar con medios para poder elegir. En dicha dirección convendría que fuese orientada la “*iniciativa para las Américas*” en materia de lucha contra el narcotráfico; por el momento, la geopolítica regional demuestra lo contrario.

BIBLIOGRAFIA

Bagley, B. (1989): “Cuatro posibles soluciones al problema del narcotráfico”, Madrid, Síntesis nº 9, págs. 411-417.

Berzosa, C. Edit. (1990): " *Tendencias de la economía mundial hacia el 2000*", Madrid, IEPALA, págs. 174 y ss.

Blanes, J. (1985): " *Migraciones, colonización y narcotráfico*", ponencia en el seminario sobre Problemática Amazónica, julio 1985.

Blanes, J. (1989): " *La economía de la cocaína y el sector informal urbano: el caso de la ciudad de La Paz, Bolivia*" en "The informal economy: studies in advance and less developed countries", Baltimore, The Johns Hopkins University Press.

Boulding, K.E. (1985): " *The World as a total system*", Beverly Hills, Sage.

Bouzas, R. (1988): " *América Latina en la economía internacional: los desafíos de una década perdida*", Pensamiento Iberoamericano nº13, págs. 31-48.

Cardoso, C.F. y Pérez, H. (1987): " *Historia económica de América Latina*", Barcelona, Crítica 2 vols.

Carter, W. y Mamani, M. (1986): " *Coca en Bolivia*", La Paz, Ed. Juventud.

Chesnais, J.C. (1987): " *La revancha del Tercer Mundo*", Barcelona, Planeta.

Delpirou, A. y Labrousse, A. (1986): " *Coca coke*", París, Ed. La Decouverte.

Doria, S. y Escobar, F. (1986): " *La economía informal en Bolivia: una visión macroeconómica*", La Paz, UDAPE.

G^o Ballesteros, A. y Bosque, J. (1989): " *De la Geopolítica a la Geografía del mapa político del mundo*", Boletín A.G.E. nº 9, págs. 11-26.

G^o Hidalgo, J.M. (1990): " *Narcotráfico*", Anuario Iberoamericano '90, Pirámide, págs. 547-557.

Henman, A. (1981): " *Mama coca*", Bogotá, Ancora Ed.

Lab-Iepala (1982): " *Narcotráfico y política: militarismo y mafia en Bolivia*", Madrid, IEPALA.

Laudes, D. (1991): " *Replanteamiento del Desarrollo*", Facetas nº 1, págs. 66 y ss.

Sid Ahmed, A. (1985): " *Norte-Sur: los grandes desafíos (...)*", México, F.C.E.

Schneider, B. (1986): " *La revolución de los desheredados (...)*", Madrid, Alhambra.

Sunkel, O. y PAZ, P. (1985): " *El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo*", Madrid, Siglo XXI.

Tamames, R. (1991): " *Un nuevo orden mundial*", Madrid, Espasa-Calpe.

Taylor, P.J. (1985): " *Un contexto materialista para la Geografía Política*" en G^o Ramón Ed.: " *Teoría y práctica de la Geografía Humana Anglosajona*", Barcelona, Ariel, págs. 178-206.

Vidal, J.M. (1991): " *Hacia una economía mundial*", Barcelona, Plaza y Janés.

Wallerstein, I. (1979): " *El moderno sistema mundial*", Madrid, Siglo XXI 2 vols.

Wallerstein, I. (1984): " *The politics of the World-Economy*", Cambridge, University Press.

RESUMEN

Se analiza el desarrollo de la economía criminal en la América Andina, su absorción por la economía formal y la informal, así como sus condicionantes geopolíticos regionales; en el marco de la planetización de los procesos económicos, entre los cuales el narcotráfico ocupa un lugar cada vez más relevante y con tales repercusiones espaciales que no debe pasar inadvertido a los geógrafos.

RESUME

Dans cette article on analyse le développement de l'économie criminale à l'Amérique Andine, son absorption par l'économie formale et informale, aussi

que ses conditionnements géopolitiques régionaux, on a étudié à l'échelle planétaire des processus économiques, dans les quelles le trafic des narcotiques joue *una rôle croissant et rélevant*, avec des répercussions spatiales si grands que ne peuvent être déconnues par les géographes.

ABSTRACT

The development of criminal economy in Andean America has been analysed, its absorption by formal and informal economy and its regional and geopolitical conditionants; around the globalization of economical processes, amongst them traffic of narcotics has a place more relevant each day and with so many special effects on, that geographers can not ever be careless about them.